

20206000097471

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20206000097471

Fecha: 2020-09-21 15:07

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2020

Señor:

JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA

Vereda San Juan Zona 2

San Andrés de Tumaco.

Jairo.Burbano@renovacionterritorio.gov.co

Asunto: Comunicación de cesación de Beneficios

En atención a lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 281 de la Ley 1955 de 2019, el cual dispone que la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, en adelante PNIS, se efectuará por parte de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, adicionado por el Decreto 2107 de 2019 y la Resolución No. 02 del 02 de enero de 2020, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la ART procede a proferir decisión en relación con su estado frente al programa.

Así pues, con fundamento en las facultades permanentes que asisten al Gobierno Nacional, el Presidente de la República mediante los Decretos 2107 y 2108 de 2019 realizó los ajustes institucionales requeridos para el efecto, por lo que modificó la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio creando la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como dependencia con autonomía administrativa y financiera encargada, entre otros asuntos, de diseñar los lineamientos, funcionamiento y puesta en marcha del PNIS en los territorios intervenidos, bajo las directrices establecidas por la Presidencia de la República y la normatividad vigente aplicable a la materia.

De esta forma, la competencia en la ejecución del programa en mención, así como el desarrollo de nuevos programas de sustitución quedó radicada en esta Dependencia, sin perjuicio de las funciones que le asisten a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en la articulación y coordinación de las líneas y directrices que permitan la implementación del Acuerdo Final.

Luego, se debe indicar que para efectos de asumir la competencia prevista en los numerales 1 y 3 del artículo 26A del Decreto 2366 de 2015, relativas a diseñar los lineamientos de funcionamiento y puesta en marcha de los procesos para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en los territorios intervenidos, y de hacer seguimiento y evaluar la ejecución de los planes y proyectos que adelante el PNIS, el artículo 8° del Decreto 2107 de 2019 previó una transición que iniciaba el 1 de enero de 2020 mediante la transferencia de los archivos que soportan los acuerdos y pagos realizados a los beneficiarios del PNIS y demás documentos relacionados con las funciones asignadas a la Agencia de Renovación del Territorio.

Para el caso en concreto, se tiene que el señor **JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA**, identificado con C.C. No. 98430786, se inscribió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito – PNIS-, mediante formulario CUB No. 750463, como CULTIVADOR de cultivos de uso ilícito, siendo su estado RETIRADO actualmente frente al PNIS.

Para el caso objeto de estudio la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito logró evidenciar que el señor **JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA** ha incumplido los requisitos establecidos por el Programa Nacional integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los cuales son necesarios para ser beneficiario de este. A continuación, se enunciarán los requisitos incumplidos por el núcleo familiar representado por la señora mencionada anteriormente:

Para garantizar una correcta ejecución de los recursos destinados al Plan de Atención Inmediata – PAI, señalado en el Acuerdo Final de Paz, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS, cuenta con una serie de instrumentos que buscan minimizar los riesgos a los que se puede ver expuesto un programa de esta índole. Para ello, se ha elaborado una hoja de ruta de implementación, que dispone en todas las etapas de implementación del mecanismo de verificación de la información recibida al PNIS, para evitar que personas que no correspondan a la población objeto del PNIS se vinculen al mismo, para lo cual se utilizan unos criterios de control, dentro de los cuales se encuentra el uso de una pluralidad de fuentes de datos para contrastar la información ofrecida por los particulares, para determinar su veracidad o exactitud.

El Decreto Ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-", en su artículo 2 estableció como objeto del programa: "promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". En concordancia con lo anterior, el artículo 6 del Decreto Ley 896 estableció que "son beneficiarios del PNIS las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016".

La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos determinó que en aquellos núcleos familiares donde se evidencie que uno de sus miembros es cotizante al régimen contributivo de seguridad social, desde antes

o después de su inscripción al PNIS, no es posible que reciba o continúe recibiendo los beneficios entregados por el PNIS por cuanto en dicho régimen *“se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias”*¹.

Por lo que se podría inferir que el núcleo familiar que cotice al régimen contributivo de seguridad social no hace parte del concepto de beneficiarios del PNIS contemplado en el artículo 6 del Decreto Ley 896 de 2017, toda vez que no es una familia en situación de pobreza ya que contaría con capacidad de pago para cotizar y suplir sus necesidades básicas. Además, no derivaría su subsistencia de los cultivos de uso ilícito por cuanto dependería de una o varias vinculaciones laborales de carácter formal que tendría con una empresa o empleador o que le permiten cotizar como independiente y por consiguiente, su sostenimiento en realidad dependería de otro tipo de actividades.

En esa medida, se procederá a verificar las herramientas previstas como fuentes de contrastación para determinar si el núcleo familiar del señor **JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA** cumple con los postulados para continuar recibiendo los beneficios del Programa.

Teniendo en cuenta que la inscripción al programa del núcleo familiar se llevó a cabo en 2018 y de acuerdo con la información suministrada por los sistemas RUAF – Registro Único de Afiliados – SISPRO y Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, se observa que el señor **JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA**, identificado con C.C. No. 98430786, se encuentra cotizando al régimen contributivo de seguridad social desde el mes de agosto de 2013, evidenciándose constancia en las mismas cada mes durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, por consiguiente, se concluye que con anterioridad a la jornada de inscripción al Programa el núcleo familiar contaba con capacidad de pago para cotizar al régimen contributivo de seguridad social y suplir sus necesidades básicas por cuanto derivaba su subsistencia de otro tipo de actividades.

Frente a lo anterior, es importante resaltar que el Gobierno Nacional, en procura de cumplir con los compromisos establecidos en el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito con el grupo armado FARC-EP el 24 de noviembre de 2016. El cual diseñó y dio inicio a la implementación de una política pública orientada a crear condiciones propicias para la transformación de los territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y a fomentar el compromiso voluntario de los cultivadores para abandonar tales cultivos de uso ilícito.

En el marco de dicha política pública, el Gobierno Nacional creó mediante Decreto 896 de 2017 el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos - PNIS (art. 1), con el objeto de "promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para

¹ Sistema de Seguridad Social en Salud Régimen Contributivo. Ministerio de la Protección Social. Comunicaciones, 2004, Página 5. En el mismo sentido, en el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, se expresó: “(...) 1. *Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago (...)*”.

contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito" (art. 2).

Del mismo modo, al ser el PNIS el desarrollo de una política pública es menester considerar que en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-630 de 2017, se determina la naturaleza del Acuerdo Final indicando que corresponde a una política pública contentiva de una serie de compromisos comprendidos dentro de la agenda política susceptible de implementación posterior, el Gobierno Nacional dando cumplimiento a la obligación consagrada en el inciso 2 del artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 procedió a la implementación normativa del punto 4 del Acuerdo Final bajo los cauces constitucionales y legales definidos, dotándolo así de estabilidad y seguridad jurídica, así mismo se creó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como una solución al problema de las drogas ilícitas, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad social y económica de algunos municipios, este programa se enfoca en brindar oportunidades a esos territorios mediante el desarrollo de economías lícitas generadas a través de la asistencia técnica y económica a los cultivadores, recolectores y no cultivadores residentes en dichos territorios.

Consecuentemente, el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tiene como objetivo brindar oportunidades para los cultivadores y cultivadoras cuyo único sustento monetario dependa de los cultivos de uso ilícito, creándose así un factor subjetivo que debe reunir el beneficiario, como bien lo ha manifestado la Corte Constitucional durante el estudio de la constitucionalidad del Decreto 896 de 2017 en sentencia C 493 de 2017 esta corporación señaló que: "El artículo 6 [del Decreto Ley 896 de 2017] es muy importante, pues determina quienes son los beneficiarios del PNIS y tiene tres componentes: el situacional, el volitivo y el temporal. El componente situacional impone que para ser beneficiario del PNIS se requiere consistir en una familia, que sea campesina, que esté en situación de pobreza y que derive su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. El componente volitivo exige la suscripción voluntaria de tres compromisos: sustituir los cultivos de uso ilícito, no volverlos a sembrar y no estar involucrados en labores asociadas a esos cultivos ilícitos. El componente temporal, que consiste en no haber realizado siembras de cultivos ilícitos posteriores al 10 de julio de 2016."

Así mismo, los protocolos internos del programa indican que los requisitos se deben acreditar no solamente antes de la vinculación sino también después de efectuada, sobre el particular se resalta que en el protocolo de vinculación se contempla que los procedimientos y medios que deben aplicar los funcionarios del PNIS con la finalidad de garantizar la veracidad de la información recibida de los potenciales participantes en el PNIS, se despliegan en tres momentos: antes, durante y después de la jornada de vinculación. Ahora bien, se puede evidenciar que conforme al análisis efectuado por el programa y el cotejo de la información que reposa en éste, se considera que el núcleo familiar no hace parte del concepto de beneficiarios del PNIS contemplado en el artículo 6 del Decreto Ley 896 de 2017, por lo que, me permito informarle que a partir de la presente comunicación se procederá a cesar los beneficios del Programa.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio- ART, con fundamento en los hechos y las pruebas que reposan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito- PNIS-, aplicando las garantías constitucionales del debido proceso, al encontrarse demostrado el incumplimiento a los requisitos y teniendo en cuenta que no existió ningún evento de caso fortuito o fuerza mayor que permitiera justificar su incumplimiento frente al programa, en aras de poner fin a su situación de suspensión se procederá con la cesación de los beneficios entregados por el PNIS al núcleo familiar del señor **JUAN CARLOS DIAJOME AMPUDIA**, identificada con C.C. No. 98430786.

Finalmente, se le informa que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, contra la presente decisión procede exclusivamente el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante el mismo funcionario que la expide, so pena de que la presente quede debidamente ejecutoriada.

Cordialmente,



HERNANDO LONDOÑO ACOSTA

Director Técnico

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos
Agencia de Renovación del Territorio

Proyectó: Greys Vargas Ibarra - Abogado Equipo Jurídico.
Revisó: Karina Reyes - Abogada contratista Grupo Jurídico.
Aprobó: Jairo Cabrera - Asesor Jurídico